



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020)

Referencia: Acción popular
Demandante: Yesid Figueroa García
Demandado: Municipio de Tunja y otros
Radicación: 15001 3333 003 **2020 00064 00**

ASUNTO

El expediente ingresó al Despacho para: i) resolver el impedimento formulado por la señora Jueza Tercera Administrativa de Oralidad de Tunja, doctora Emilsen Gelves Maldonado, mediante auto de 16 de julio de 2020, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 3.º del artículo 130 CPACA y ii) pronunciarse sobre la admisión de la acción popular de la referencia.

CONSIDERACIONES

I. Del impedimento formulado

El artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo frente a los impedimentos y recusaciones prevé:

“ARTICULO 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil¹ y además, en los siguientes eventos:

(...)

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurren al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado.”

Sobre los impedimentos, en auto de fecha 16 de abril de 2012, el Consejo de Estado sostuvo:

“...La figura de los impedimentos debe entenderse anclada como una institución útil para la obtención de los fines constitucionales que se persiguen con la administración de justicia dentro de un Estado Social de Derecho y como garante del derecho fundamental a la igualdad (artículo 13

¹ Norma derogada por la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”

constitucional), siendo claro que **la labor judicial está guiada por la independencia y la imparcialidad**².

Al respecto es preciso señalar que la institución del impedimento persigue la salvaguarda de la imparcialidad del juzgador, como bien lo ha precisado la jurisprudencia constitucional al observar que

*“Las normas que consagran las causales de impedimento y recusación, se han dictado para garantizar la imparcialidad del juez. El que existan las causales, fijadas por la ley y no por el capricho de las partes, garantiza, dentro de lo posible, **la imparcialidad del juez y su independencia de toda presión, es decir, que sólo esté sometido al imperio de la ley**”³...”*⁴
Resaltado fuera de texto.

Así las cosas, comoquiera que, en el caso particular, se encuentra establecido que el compañero permanente de la señora juez tercera administrativa del Circuito de Tunja, actualmente se desempeña como secretario de despacho, código 020, grado 09 de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Tunja, cargo que, según el artículo 16 del Decreto 785 de 2005⁵, pertenece al nivel directivo de la entidad territorial accionada, **se aceptará el impedimento** formulado, con el fin de asegurar el principio de imparcialidad en la resolución de fondo del presente asunto.

II. De la admisión de la demanda

El Despacho admitirá la demanda formulada por el señor Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja y Veolia Aguas de Tunja S.A E.S.P., al considerar que cumple los requisitos legales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 472 de 1998, 3.º y 6.º del Decreto 806 de 2020.

Sin embargo, efectuará algunas observaciones respecto al requerimiento previo como requisito de procedibilidad en la acción popular. En este orden, se tiene que el artículo 161 del CPACA consagra los requisitos previos para demandar, estableciendo en el numeral 4.º que: *“cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código”*.

A su turno, el artículo 144 *ejusdem* dispone lo siguiente:

“Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos.

²“Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces”. Corte Constitucional, Sentencia C-037-1996. Magistrado Ponente Doctor Vladimiro Naranjo M.

³ Corte Constitucional, Sentencia C-19/1996. Magistrado Ponente Doctor Jorge Arango Mejía.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Expediente No. 68001-23-31-000-2011-00694-01 (43431).

⁵ “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.”

(...)

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”. (Subrayas de la Sala).

Con relación al cumplimiento del mencionado presupuesto, en providencia de 21 de abril de 2016⁶, el Consejo de Estado destacó que en el requerimiento previo debía solicitarse **expresamente** la adopción de medidas tendientes a proteger los derechos e intereses colectivos. Al respecto, sostuvo:

“(...) la finalidad del requisito de procedibilidad es brindar un escenario administrativo para conjurar la vulneración o amenaza de derechos colectivos y, por esto, resulta imperativo que se solicite de manera expresa la adopción de medidas, pues solo así puede advertirse la renuencia de la administración y justificarse la puesta en conocimiento del asunto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, no hay cumplimiento tácito o indirecto del requisito”. (Subrayas del Despacho).

En igual sentido, en la Sentencia de 7 de febrero de 2018⁷, el Alto Tribunal analizó el contenido que debe tener la reclamación previa a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas para el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción popular, esto es, un contexto específico delimitado por la amenaza o vulneración del interés o derecho colectivo que se intenta proteger.

En este sentido, dicha Corporación expresó:

“...es necesario que la reclamación previa contenga unos elementos mínimos que permitan diferenciarla de otro tipo de peticiones que involucren intereses ajenos a los protegidos por la acción popular. Estos requisitos mínimos coinciden, en lo esencial, con algunas de las exigencias previstas en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, para la formulación de la demanda en ejercicio de la citada acción.

En efecto, cuando el artículo 144 ya mencionado ordena que se debe solicitar a la autoridad la adopción de “las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado”, implica que en la reclamación debe

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 21 de abril de 2016, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número de radicación: 41001-23-33-000-2014-00193-01(AP).

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 7 de febrero de 2018, CP. Ramiro Pazos Guerrero, número de radicación: 25000-23-41-000-2012-00498-01(AP).

hacerse alusión a un contexto específico, que está delimitado por (i) el derecho o interés colectivo que se considera quebrantado o amenazado; (ii) los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición; (iii) la enunciación propiamente dicha de las medidas que se consideran necesarias para la protección del derecho o interés colectivo; (iv) las pruebas que pretenda hacer valer, de ser el caso y (v) la identificación de quien ejerce la acción.

Estas exigencias no suponen una carga desmesurada para el accionante, máxime cuando no son ajenas al ordenamiento jurídico. Simplemente se trata de dotar al mecanismo de unos elementos mínimos que permitan un escenario de discusión y participación adecuado que garantice la eficacia de los derechos...”
(Se destaca)

Verificado el escrito dirigido a la parte demandada para efecto de cumplir el requisito previo, el Despacho observa que el demandante radicó sendas peticiones los días 17 y 18 de febrero de 2020, en ejercicio del derecho de petición de carácter general y de información ante la Secretaría de Desarrollo del municipio de Tunja y Veolia Aguas de Tunja S.A E.S.P., respectivamente, sin mencionar expresamente la vulneración o amenaza de algún derecho o interés colectivo o que la finalidad de dichas solicitudes sea la adopción de medidas necesarias para la protección de algún derecho de esta categoría.

Ahora bien, por disposición del artículo 5.º de la Ley 472 de 1998, el trámite de la acción popular debe desarrollarse con sustento en la prevalencia del derecho sustancial, luego, al considerar que el agotamiento del requisito previo precisamente se materializa a través del ejercicio del derecho de petición, y que de la lectura integral se advierte el propósito perseguido consistente en la adopción de medidas para preservar los derechos colectivos mencionados en la demanda, puede considerarse cumplido tal requerimiento. Con todo, el Despacho exhortará a la parte demandante para que en futuras demandas observe esta carga, según los presupuestos señalados por el Consejo de Estado.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Aceptar el impedimento formulado por la titular del Juzgado Tercero Administrativa Oral del Circuito Judicial de Tunja, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO.- Avocar el conocimiento del asunto de la referencia.

TERCERO.- Solicitar al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos de Tunja que, de manera inmediata, efectúe la compensación de este proceso.

CUARTO.- Admitir con conocimiento en primera instancia la demanda presentada por el señor Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja y Veolia Aguas de

Tunja S.A. E.S.P., por la eventual amenaza y vulneración de los derechos colectivos establecidos en los literales d) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO.- Notificar personalmente del presente auto a la Procuraduría Judicial delegada ante los Juzgados Administrativos, según lo preceptuado el artículo 21 de la Ley 472 de 1998.

De conformidad con el artículo 80 *ibídem*, comuníquese la presente decisión a la Defensoría del Pueblo, a efecto del registro público de las acciones populares que lleva dicha entidad.

SEXTO.- Notificar personalmente a los representantes legales o quienes hagan sus veces del municipio de Tunja y Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P, en la forma prevista en los artículos 198 y 199 del CPACA, este último modificado por el artículo 612 del CGP, por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998, así como lo dispuesto en el artículo 8.º del Decreto 806 de 2020.

La notificación se realizará mediante el envío de la presente providencia al buzón de notificaciones judiciales de las entidades demandadas, la cual se entenderá surtida transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del correo electrónico (artículo 8.º Decreto 806 de 2020), sin que para tal efecto deba remitirse la demanda y sus anexos, conforme a lo previsto en el artículo 6.º *ejusdem*.

En este orden, se correrá traslado a la parte demandada por el término de diez (10) días, los cuales comenzarán a correr veinticinco (25) días después de realizada la notificación, para que conteste la demanda y allegue con esta todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer dentro del proceso, con la advertencia de que las excepciones serán las que consagra el artículo 23 de la Ley 472 de 1998.

SÉPTIMO.- La parte demandante deberá informar a través de algunos de los siguientes medios masivos de comunicación (Diario Regional Boyacá Siete Días, Casa Editorial El Tiempo, emisoras radiales locales con sede o difusión en el departamento de Boyacá), a los miembros de la comunidad del municipio de Tunja, antes de la fecha en que se lleve a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, a fin de que puedan intervenir las personas que señala el artículo 13 de la Ley 472 de 1998.

Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar la demanda, antes de que se profiera fallo de primera instancia. También podrán coadyuvar esta acción las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus delegados y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos invocados (artículo 24 de la Ley 472 de 1998).

OCTAVO.- Advertir a las partes y demás sujetos procesales que deben realizar todas las actuaciones a través de medios tecnológicos, y enviar un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o actuaciones que realicen a todos los extremos procesales, **simultáneamente** con copia incorporada al mensaje enviado al Despacho, a través de los canales digitales que a continuación se señalan, según la información que reposa en el proceso:

Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja	correspondenciajadmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ministerio Público	procjudadm177@procuraduria.gov.co
Actor popular: Yesid Figueroa García	yesidsebas87@gmail.com
Municipio de Tunja	juridica@tunja-boyaca.gov.co
Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.	info.tunja@veolia.com

NOVENO.- Exhortar a la parte demandante para en futuras demandas observe los presupuestos señalados por el Consejo de Estado, con relación al agotamiento del requisito previo establecido en el artículo 144 del CPACA.

Notifíquese⁸ y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

2e0cc7da1f5037bbab5ef92a0c2a361e044c68d6966011f4eb3905742f0495ca

Documento generado en 06/08/2020 09:35:33 a.m.

8

Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por estado electrónico N.º 20 de hoy 10 de agosto de 2020, a las 8:00 a. m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario